

Relaciones y negociaciones entre las sociedades indígenas de la región atacameña, y el Estado y la sociedad chilenos.

Siglos XIX y XX

José Luis Martínez C.
Universidad de Chile

I

... bueno, en aquel tiempo era casi boliviano todo. Todo esta parte, desde Antofagasta, a donde era. Con la idea de ese tiempo, del '79, cuando hicieron la guerra. Mucho boliviano, después ya, cuando hicieron 79, el año 80 parece que ya nacionalizaron aquí po', chileno. Y quedamos muchos aquí po', por nacionalizados chilenos. Andaba mucho Comisión y decía el finado mi papá, ah, decía que usted va a quedar ahora chileno, o si quiere irse a donde pertenecía la raya, se va para su tierra, a Bolivia. O si quiere nacionalizar por chileno, aquí al tiro le anotaron. Le cambio todo, le dijo, por chileno.

(Testimonio de don Juan Ayaviri, Toconce, Segunda Región, 1984)

Y los habitantes de Toconce "escogieron". Hoy son chilenos, aun cuando en realidad conservan sus viejos lazos de parentesco y relaciones con el lado boliviano (muchos de ellos parientes) y con el lado argentino. En definitiva, se trata de una determinada decisión, una cierta elección en un momento crucial —la llegada del Estado chileno a la región— que permite atisbar, aunque sea breve-

mente, algunos rasgos y trazos de lo que pareciera ser un proceso mucho más complejo, sutil y variado. Una actitud (y una práctica, si se quiere) que no es la de la simple aceptación de decisiones estatales unilaterales.

Se trata, al parecer, de una manifestación más de una vieja tradición cultural que fue puesta en práctica frente a otras presencias estatales y en la que se advierte un manejo flexible de situaciones, de actitudes, orientadas siempre, desde la óptica indígena, a optimizar su posición con respecto al Estado o la sociedad dominante. Una suerte de "negociaciones", no siempre formales o institucionalizadas, muchas veces simplemente un conjunto de actitudes o de prácticas sociales o económicas, por intermedio de las cuales las sociedades andinas han intentado mejorar su posición en relación al grupo dominante del momento.

No creo arriesgado postular, así, una suerte de "tradición" política de la negociación por parte de los grupos menores, los pequeños señorios o las comunidades reducidas frente a las sociedades mayores en el área andina. Los etnohistoriadores han planteado que ya desde el Tawantinsuyo es posible observar parte de estos procesos de "negociación". Se negocia con los inkas las condiciones o

mecanismos de la relación de dominación (Pease 1979, 1991; Morris 1985); posteriormente con la Corona y sus representantes locales (Murra 1980).¹ Se negocia con los estados republicanos y renegocia con los gobiernos liberales que rompen el anterior pacto conservador (Platt 1982). Y se intenta negociar, también hoy, las nuevas condiciones de inserción social, política, cultural.²

Quisiera referirme brevemente a la historia de algunas de estas "negociaciones" entre el Estado y la sociedad chilena, por una parte, y las comunidades indígenas de la región atacameña, por otra; intentaré –de paso– visualizar cómo estos procesos han tenido por espacio concreto determinados territorios y, con ello, los han intervenido, modificado y alterado.

II

En el norte del país, durante los siglos diecinueve y veinte, se desarrolló un proceso cuyo objetivo parece haber sido, por una parte, configurar una política de presencias estatales en espacios y territorios tradicionalmente marginales; y, por otra, asegurar la integración como mano de obra asalariada de las poblaciones indígenas (proceso ya muy avanzado en las regiones andinas vecinas, más centrales). La necesidad de configurar una presencia estatal estable parece válida sobre todo para las administraciones boliviana y chilena.

Resulta interesante constatar que, heredera de

una vieja tradición colonial, la administración estatal peruana tenía una política de presencia territorial, de ocupación de espacios y de manejo de relaciones con las poblaciones indígenas de Tarapacá, que no se advierte en el caso de la administración boliviana para estas regiones y cuya ausencia es particularmente clara para el caso de la administración chilena.

Cada burocracia estatal intentaba "dibujar", para sí misma, una determinada representación de los espacios, territorios, poblaciones y riquezas, necesaria para la determinación del control administrativo, puesto que se trataba, en todos los casos, de burocracias externas a la región (Lima, La Paz o Santiago). En el caso de Tarapacá, los documentos de los distintos ministerios chilenos reflejan cómo –en un primer momento del proceso de toma de control– se "copiaba" o se seguía, en parte, la visión peruana precedente (ANCh, Fondo Min. de RREE, vol. 780, año 1897; Fondo Min. del Interior, leg. 868, of. 69, año 1880).

Pero en el caso de Atacama, acaso por su mayor marginalidad y aridez y por la mayor debilidad de estructuración y presencia de la administración boliviana precedente, la burocracia chilena se vio forzada a recrear esa imagen para poder pasar, recién en el siglo veinte, al proceso de expansión del Estado hacia aquellos espacios que aún permanecían periféricos. Es, precisamente, el período de los "viajeros" en la región. Phillippi, San Román, Bertrand, Risopatrón, Vaisse, por mencionar a los más conocidos y a los que habría que agregar una larga lista de anónimos funcionarios que entregaron posteriormente sus informes a la respectiva autoridad (ANCh, Fondo Min. de Relaciones Exteriores, vol. 616, año 1894; vol. 689, año 1895).

Como siempre, estos procesos no son unidireccionales. Resulta clara, a estas alturas, la participación indígena –activa y creativa– en ellos. No sólo respondiendo reactivamente, sino también buscando influirlos y modificarlos.

El último cuarto del siglo diecinueve es de años intensos. Tres países disputaban, de una u otra forma, el control de esos territorios, productos y poblaciones. Con la batalla de Topáter (marzo de 1879), se consolidó, aparentemente al menos, el control chileno sobre los oasis piemontanos y la

1. Una muestra de los procesos de negociación colonial es la reunión de kurakas en Mama (costa central peruana), en los primeros años de la invasión europea, cuando los dirigentes étnicos allí reunidos se dirigieron al Rey para proponerle una forma distinta de relación que excluyera a los encomenderos. También el Memorial de Obrera, documento del siglo dieciséis a través del cual algunos dirigentes de esa región requirieron del Rey determinados privilegios en virtud de su "nobleza" y posición; a cambio, ofrecían mejores condiciones de relación entre sus grupos étnicos y la Corona. La misma Carta al Rey de Guamán Poma conlleva una suerte de intento de rediscutir y proponer nuevas o diferentes formas de relación y dominación.
2. Esto implica una posición contraria a aquellos que presumen y asumen la existencia de un rol siempre pasivo y "sumiso" por parte de las poblaciones indígenas.

precordillera (Calama, Chiuichiu y San Pedro de Atacama), pero pareciera haber quedado un vacío en cuanto al control de los espacios propiamente puneños. En esos primeros años de control chileno, se perciben intentos por ocupar las tierras altas y, con ello, parte de los espacios de las comunidades indígenas. Se efectuaron instalaciones militares en la puna, orientadas al control del tráfico de productos con Argentina y se nombró autoridades locales sujetas al control –al menos nominal– de los jefes civiles y militares en Antofagasta, etc. (ANCh, Fondo Min. de RREE, vol. 378, tomo I, año 1887). Pero Bolivia mantuvo sus pretensiones en la zona y, en 1886, el Congreso boliviano reiteró su dominio sobre las comunidades indígenas de la puna atacameña.

El Congreso Nacional decreta:

Artículo 1º Las pequeñas poblaciones denominadas Quitana, Rosario, Pastos Grandes, Antofagasta del Desierto, Carachipampa, corresponden a la provincia de Sub-Lipez i quedan sujetas a las autoridades políticas, como judiciales i administrativas de ellas.

(ANCh, Fondo Min. de RREE, vol. 378, tomo I, año 1887, n° 1)

Aquí hay un punto que me interesa destacar, porque apunta a las diferentes ópticas y lógicas de dominación y control políticos ejercidos por uno y otro Estado y que parecen ser captadas por las comunidades indígenas y usadas en su propio beneficio. El Estado chileno se interesa en los territorios. Aplica el viejo esquema de un territorio homogéneamente constituido, con fronteras continuas, en el que lo fundamental es el control de los espacios y las riquezas de la tierra (sobre todo las mineras). En esta perspectiva, las poblaciones asentadas allí son, o potencialmente enemigas (en tanto "bolivianos"), o un objeto que resulta indiferente (en tanto "atrasados", "pobres": indios, en definitiva) y, por lo tanto, escapan al peso directo de la administración estatal o las cargas fiscales. Al Estado boliviano lo que parece interesarle, en cambio, son las comunidades, las poblaciones indígenas. Y una de las causas de ello es que, como parte de la herencia colonial, las comunidades pagan

aún el tributo indígenal semestral, una de las bases más importantes de sustentación del tesoro público boliviano (Dalence 1851; Cajas 1975; ANB Padrones de Revisitas).³ Presión por las fronteras y los espacios versus presión por la gente. Es una diferencia que las comunidades perciben rápidamente.

El tercero en la discordia es Argentina, movida –me sospecho– mucho más por intereses locales que federales. Existe en el noroeste argentino una vieja tradición de haciendas ganaderas que usaban la mano de obra indígena como arrieros y las tierras de las comunidades para pastos de engorda en los caminos, sobre todo en los pasos hacia los mercados boliviano-chilenos. De allí que los hacendados y ganaderos argentinos parecieran tener también fuertes intereses, esta vez sobre las tierras y sobre la potencial mano de obra de las comunidades. La presencia argentina habría implicado también una fragmentación de las tierras de las comunidades (ANCh, Fondo Min. de RREE, vol. 591, año 1893).

El gefe [sic] del destacamento existente en Pastos Grandes, lugar limítrofe con la Argentina, me ha enviado las comunicaciones que acompaño, y que él ha obtenido originales, por las que verá U. que el Gobierno Provincial de Salta nombra autoridades para poblaciones que están comprendidas en el territorio de la República. También acompaño copia de otra comunicación que ha obtenido el mismo gefe dirigida por el Sub-Prefecto de Sur-Lipez al Corregidor del Rosario, por la que aparece que el Gobierno de Bolivia pretende también tener dominio sobre algunos de estos lugares.

(ANCh, Fondo Min. de RREE, vol. 413, año 1888)

Es en este momento que podemos observar en operación esos mecanismos de "negociación" a los

3. Las comunidades indígenas son vistas, además, como proveedoras de mano de obra regional. En una carta fechada el 8 de febrero de 1879, el Gobernador boliviano de la provincia informaba del descubrimiento de una mina de plata y cobre en los cerros de El Inca (Chuquicamata), para cuyo trabajo proponía el aporte de las comunidades de la zona (ANB Min. del Interior t. 208, n° 19).

que me refería inicialmente. Algunas comunidades, como Susques y Pastos Chicos, aceptan pagar las contribuciones indígenas bolivianas atrasadas, pero otras como Rosario, Coranzules, Toro y Pastos Grandes se niegan, alegando estar fuera de esa jurisdicción. Las autoridades argentinas nombran delegados en algunas de ellas, cargos que los dirigentes étnicos locales rechazan, alegando —esta vez— ser bolivianos... (ANCh, Fondo Min. de RREE, vol. 425, of. 788, año 1889).

Una carta de don Cosme Damián Vázquez, autoridad de Susques nombrada tanto por bolivianos como chilenos, expresa esta situación de presiones argentinas y bolivianas y la ausencia de ellas (por carencia de políticas al respecto) de parte chilena, dando un indicio de cómo se manejan los dirigentes indígenas:

Susques, enero 1º de 1893

El Inspector del Distrito

Al Señor Subdelegación de San Pedro de Atacama

Habiendo recibido su muy respetada nota fecha 30 del mes pasado noviembre en el que me acusa resivo U.S. de la nota que le indiqué al 22 del mismo, Sr. mi autoridad, hasta hoy de la fecha ya se habían tomado las medidas necesarias del qui rriendo cuenta, de los avusos, gravedades que nos tienen en esta, como ser de Volivia y la República Argentina. No se a cual nacion perteneseremos, que nos tienen en gravedad.

En esta circunstancia, Siendo pido el "decreto" circular, de vuestro Supremo Gobierno de la "Nación" dado facultades de nuestras leyes, que nos ampara en el pais ygalmente de la -copia- que le incluye, pidiendo que se presentare el Sello con el Escudo de "Chile".

En los fines consiguientes, remito una -"Nota"- Oficial, de Bolivia, presentados con tres sellos y preferidos para D. Pedro Basquez, pero el no se a ocupado a ningun comidimiento y ni quiere tenerlos en su poder ...

Sin mas mi señor mi ancia quedo a sus ordenes y espero las leyes de facultades y un tanto quedo a deliverar con el poco conocimiento que tengo.

(ANCh, Fondo Min. de RREE, vol. 591, of. 14 anexo, año 1893)⁴

La carta expresa la intención de permanecer bajo jurisdicción chilena ("vuestro supremo gobierno ... que nos ampara en el pais ..."), pero no deja asimismo de expresar la inquietud por el resultado final del proceso ("No se a cual nacion perteneseremos, que nos tienen en gravedad"). Y creo que resulta clara la intención de incidir en una decisión. Frente a la contribución indígenal, el Estado chileno no cobra una tributación directa a los indígenas; frente a las presiones ganaderas argentinas sobre la escasa tierra y la exacción de la mano de obra, el gobierno chileno parece carecer en absoluto de una política hacia las comunidades. Más aún, hasta ese momento el control político y administrativo chileno se ejerce básicamente en las tierras bajas de la costa, lo que implica que, además de la ausencia de una carga fiscal directa y de presiones constantes, la chilenización aparecería ante los ojos indígenas en ese momento como una posibilidad de optimizar su posición; de allí los intentos por incidir favorablemente hacia uno de los países en pugna. La actitud del dirigente étnico de Susques es, en definitiva, la misma que adoptarían un poco más tarde los comuneros de Toconce, si recordamos el testimonio de don Juan Ayaviri.

En estas decisiones, el patriotismo está absolutamente ausente. No es un factor relevante para comunidades que, por siglos, han estado sometidas a uno u otro control estatal y que, divisiones más, nacionalidades menos, continúan conservando viejos lazos de parentesco y reciprocidad con habitantes de una ancha franja que va desde la costa del Pacífico hasta la ceja de selva en la región del Chaco boliviano y argentino, pasando por el altiplano meridional boliviano. El acceso a recursos, mercados, circuitos, no se ve afectado en esta etapa por una decisión de esta naturaleza. El problema está en la optimización de la posición con respecto al Estado, y es ésta la responsabilidad de los dirigentes. De allí la carta de don Cosme Damián Vázquez.

Hacia fines del siglo diecinueve e inicios del veinte, la presencia chilena se concentra en las tierras bajas costeras y en los enclaves mineros de la depresión intermedia (yacimientos de plata de El Indio y Caracoles, salitreras en el sector de Tocopilla), con algunas escasas excepciones

4. En la transcripción de esta carta se respetó la redacción, ortografía y uso de signos de escritura.

(borateras en Ascotán y puntos vecinos y haciendas agrícolas en Chiuchiu y San Pedro de Atacama). Es la minería la que redefine los espacios, básicamente orientada por un modelo de enclaves abastecidos desde afuera. En esta coyuntura histórica, los habitantes indígenas de las tierras altas de la región atacameña parecen aplicar, al menos, una doble estrategia de relación e inserción en los procesos económicos regionales.

Por una parte, retomando una vieja actividad económica, la arriería, y la desarrollan en torno a los nuevos ejes y los más recientes intereses comerciales, en lo que podríamos llamar un proyecto de desarrollo de un tráfico arriero independiente hacia el que se reorienta, incluso, parte de la agricultura que termina transformada en forrajera (alfalfa) (Áranda 1964, Sanhueza 1991). Ya entre los siglos dieciséis al dieciocho fueron las caravanas de atacameños las que contribuyeron a abastecer a Potosí y las ciudades del Alto Perú, y en el siglo diecinueve, eran parte del sistema de ingreso de mercaderías y maquinarias a Bolivia (Sanhueza 1991). Ahora se trata de abastecer las minas y las ciudades, y las comunidades se dedican a ello activamente. En la tradición oral regional casi todos guardan memoria de las largas travesías realizadas para traer ganado desde Argentina, o de los viajes a las ferias anuales de Huari (en Bolivia) para traer mulas que abastecieran los yacimientos, o productos que incorporar a los circuitos de intercambio que permitían abastecer a las poblaciones mineras.

Aun cuando se trata de un proceso poco estudiado en lo que se refiere a sus matices durante el siglo diecinueve,⁵ quisiera sugerir la posibilidad de que parte del tráfico arriero no sólo buscaba abastecer los insumos industriales, sino también, y en una escala mucho menor, pero no por ello menos vital, a las poblaciones mineras. Esta dimensión, que resulta oculta por la primera, consistía básicamente en el abastecimiento a bajo precio de pequeñas cantidades de productos de consumo directo, y permitía también una revitalización de

parte de las actividades agrícolas familiares en las comunidades. Se trata, obviamente, de un tema que debe ser estudiado en profundidad. Lo interesante de esta sugerencia es el posible impacto que podría haber tenido en la reproducción de las condiciones de explotación de la mano de obra minera, puesto que permitiría la adquisición de productos a bajo precio, haciendo desaparecer parcialmente las presiones por los salarios, ya iniciadas en 1882 con los movimientos huelguísticos mineros (ANCh Min. del Interior, vol. 934, of. 133).

Una segunda línea, muy próxima a la anterior, se da con la explotación indígena de la llareta, planta resinosa altamente combustible que crece sobre los 3.500 metros de altura y que se transformó en el energético con el cual funcionó Chuquicamata hasta principios de este siglo. La población local se dedicaba a la extracción –casi indiscriminada– de la llareta, que era vendida a intermediarios urbanos, los que, a su vez, la vendían al mineral. En este momento se produjo lo que tal vez es la primera crisis ecológica, puesto que la llareta se extinguió en amplias zonas.

Hasta aquí, la inserción y relación de las comunidades pasa, fundamentalmente, por el manejo y control indígena de sus propios recursos y espacios y de su energía de trabajo independiente. Cuestión completamente distinta a lo que ocurría, por ejemplo, con las comunidades de la quebrada de Tarapacá, que bajaban a las salitreras y se empleaban como mano de obra asalariada. En el caso atacameño, las comunidades continuaban ocupando los pisos ecológicos altos con una baja presencia estatal, y la sociedad nacional ocupaba preferentemente las tierras intermedias y bajas. Esta especial forma de relacionarse permitía, paralelamente, la conservación de las estructuras sociopolíticas de las comunidades.⁶

5. La tesis de Cecilia Sanhueza es un primer paso para el estudio de los procesos de mercantilización de las poblaciones indígenas regionales. Sin embargo, se trata de un tema de muchas proporciones que requieren aún de investigación.

6. La creación y consolidación de los actuales pueblos de Toconce y Cupo, a fines del siglo diecinueve y principios del actual, con indígenas oriundos de Bolivia, Argentina y población de Aiquina, en la cuenca del río Loa; así como la creación de nuevas andenerías y terrazas de cultivo y la explotación de nuevas estancias ganaderas altas, en ese mismo período, dan una muestra de esta capacidad vital y de autogeneración, así como de la relativa autonomía de las comunidades (Martínez 1985).

Sin embargo, el desarrollo tecnológico minero acelerado y una cada vez mayor toma de conciencia de la necesidad de expandir la presencia estatal y de rigidizar la frontera, fueron cambiando paulatinamente esa forma de articulación. Ya iniciado el siglo veinte, la expansión minera generó una ardua disputa por los territorios y sus recursos. El objetivo era, ahora, obtener el control del agua y de los espacios de circulación. Se trata de un proceso que ha sido en parte documentado en otros trabajos (Aldunate 1985; Castro y Martínez 1991 Ms; Cavieres 1985 Ms). Es importante destacar que, nuevamente, algunas comunidades intentaron no quedar al margen y generar sus respuestas. Es el caso, por ejemplo, de la comunidad de Aiquina, que ya en 1907 inscribió en el Conservador de Bienes Raíces, colectivamente, la propiedad de las aguas de la vega de Turi, para conservar sus tierras de pastoreo y sembradíos. Se trata de una temprana incursión en el mundo legal chileno, de parte de comunidades que, recordemos, recién entre 1904 y 1910 estaban siendo "chilenizadas"; de paso, demostraban la gran capacidad colectiva de las comunidades andinas para insertarse en las nuevas condiciones sociopolíticas.

A pesar de estos esfuerzos por defenderse, sin embargo, los comuneros fueron expulsados de gran parte de los espacios altoandinos, sobre todo de aquellos ubicados en las nacientes del río Loa y de sus afluentes, donde se ubicaban las azufreras, borateras y las tomas de agua del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y del mineral de Chuquicamata. Aunque las comunidades fueron expulsadas de estos espacios, algunas veces con una violencia física que incluía la eliminación del ganado, no se produjo un arrebato generalizado de las tierras, de forma tal que ello permitió una cierta forma de pervivencia y continuidad de una mínima base de reproducción social y cultural indígena.

Aproximadamente desde los años veinte del presente siglo, se desarrolló un proceso más o menos acelerado de implantación de la presencia estatal y de penetración sociocultural entre las comunidades de la región atacameña. Son, de una u otra manera, los años de la pérdida de identidad, de la vergüenza de ser indio; los años del abandono del lenguaje y de la integración, como mano de

obra asalariada, al mercado minero y urbano. Es el período de expansión máxima de la presencia estatal. Se crearon escuelas y postas, se construyeron retenes policiales y puestos militares fronterizos, la frontera se rigidizó y se intentó impedir el paso hacia y desde los países vecinos, etc. La creciente presencia estatal alcanzó su climax en el decenio 1980-90, durante el cual la fuente de ingresos más importante para quienes aún no habían emigrado llegó a ser el POJH y el PEM (Cavieres 1985 Ms).

Pero se trata de un proceso que, obviamente, tiene muchas aristas y matices y al que nos hemos referido con anterioridad en otro trabajo (Castro y Martínez 1991 Ms. No quisiera repetir aquí las mismas ideas, sino referirme, más bien, a una situación nueva, que surge de este contexto que acabo de esbozar tan rudimentariamente y que no es más que un nuevo intento de negociación.

Me refiero al actual resurgimiento de una identidad étnica, la atacameña, que involucra a comunidades y pobladores que hasta hace pocos años atrás la hubiesen negado, pero que parece ser necesaria (o al menos así es vista), para renegociar frente al Estado (y la Comisión Especial de Pueblos Indígenas), una posición —nuevamente— más expectante.

Tradicionalmente ha existido una separación entre las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama y las de la hoya del río Loa. Los habitantes de un sector se reconocen diferentes a los del otro. Aunque existe una zona intermedia y, en la práctica, todas las localidades tienen actualmente población proveniente (en algún momento del siglo diecinueve y principios del veinte) del noroeste argentino, sur boliviano (Lípes) y local, los de la hoya del río Loa son reconocidos como con mayor influencia boliviana y los del salar como atacameños. Hay que señalar, además, que éstas son identidades asignadas externamente. Hasta hace pocos años, los "atacameños" jóvenes no se reconocían como tales y un habitante de Socaire o Peine (al extremo sur del salar), hubiese expresado que "atacameños" eran los de Atacama, es decir San Pedro de Atacama, pero no ellos. Algo similar ocurre con los "bolivianos" de la cuenca del río Loa, muchos de los cuales alegan su condición de locales.

Hoy, se trata de una región en la que el intento por reconocerse colectivamente como atacameños y de ser reconocidos a su vez como tales, es un esfuerzo que recorre y cruza todas las comunidades y requiere borrar esas diferenciaciones anteriores. Se trata, creo (aunque es muy incipiente aún para afirmarlo taxativamente), de una reconstrucción de una identidad como parte de la búsqueda de ese espacio de interlocución que, de estar ausente, no tendrían. Únicamente como atacameños (en tanto que sujeto colectivo y con identidad), pueden negociar frente al Estado; y las comunidades, siguiendo una tradición ya centenaria, vuelven a negociar y a buscar cómo optimizar una vez más su posición frente a una sociedad mayor.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

A) FUENTES MANUSCRITAS

ARCHIVO NACIONAL DE CHILE (ANCH)

Fondo Ministerio del Interior, vols. 868, of. 69, año 1880; vol. 934, of. 133.

Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, vol. 378, tomo I, n° 1, año 1887; vol. 413, año 1888; vol. 425, of. 788, año 1889; vol. 591, año 1893; vol. 616, año 1894; vol. 689, año 1895; vol. 780, año 1897.

ARCHIVO NACIONAL DE BOLIVIA (ANB)

Fondo Ministerio del Interior, tomo 208, n° 19, año 1879.

Fondo Ministerio de Hacienda, tomo 21, n° 17, año 1830; tomo 26, n° 16, año 1831.

Fondo Padrones de Revisitas, n° 234, año 1877.

B) IMPRESOS

Aldunate, Carlos

1985 "Desecación de las vegas de Turi". *Chungara* (Arica) 14:135-139.

Aranda, Ximena

1964 "San Pedro de Atacama. Elementos diagnósticos para un plan de desarrollo local". *Informaciones Geográficas*, número especial, Universidad de Chile, Santiago.

Cajías, Fernando

1975 *La provincia de Atacama 1825-1842*. La Paz: Ed. Universo.

Castro, V. & J. L. Martínez

1991 Ms "Poblaciones indígenas de la provincia de El Loa". En: Hidalgo et al., eds. *Culturas de Chile*, vol. II. Santiago: Ed. Andrés Bello (en prensa).

Cavieres, Aaron

1985 Ms "Estudio del efecto de las políticas de uso de los recursos hídricos del altiplano chileno sobre las comunidades de pastores aymara". Informe final Proyecto WUS-AHC. Santiago.

Dalence, José María

1851 *Bosquejo Estadístico de Bolivia*. Chuquisaca: Imp. de Sucre.

Martínez C., José Luis

1985 "La formación del actual pueblo de Toconce. Siglo XIX". *Chungara* (Arica) 15:99-124.

Morris, Craig

1985 "From Principles of Ecological Complementarity to the Organization and Administration of Tawantinsuyu". En: Masuda, Shimada y Morris, eds. *Andean Ecology and Civilization*: 477-489. Tokio: University of Tokio Press.

Murra, John

1980 "Waman Puma, etnógrafo del mundo andino". En: F. Guaman Poma de Ayala. *El primer Nueva Crónica y Buen Gobierno*. 3 vols. México: Siglo XXI.

Pease G.Y., Franklin

1979 "La formación del Tawantinsuyu: mecanismos de colonización y relación con las unidades étnicas". *Histórica* (Lima), vol. III, n° 1:97-120.

1991 *Los Incas*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Platt, Tristán

1982 *Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el norte de Potosí*. Lima: I.E.P.

Sanhueza, Cecilia

1991 "Orígenes y desarrollo de la arriería colonial en Atacama. Siglos XVI-XVIII". Tesis de Licenciatura en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.